


**DATOS NOTIFICACION ELECTRONICA**

**Usuario conectado:** CIPPITELLI LEONARDO PABLO  
**Organismo:** JUZGADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N° 1 - SAN ISIDRO  
**Carátula:** NEW REVLON ARGENTINA S A C/ MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO S/ PRETENSION ANULATORIA  
**Número de causa:** 62862  
**Tipo de notificación:** SENTENCIA  
**Destinatarios:** 20279300883@notificaciones.scba.gov.ar, 20228250830@notificaciones.scba.gov.ar  
**Fecha Notificación:** 11/6/2024  
**Alta o Disponibilidad:** 7/6/2024 00:27:23  
**Firmado y Notificado por:** VENERE María Paula. JUEZ --- Certificado Correcto. Fecha de Firma: 07/06/2024 00:27:23  
**Firmado por:** VENERE María Paula. JUEZ --- Certificado Correcto.  
**Firma Digital:**  **Verificación de firma digital:** Firma válida

**TEXTO DE LA NOTIFICACION ELECTRONICA**

**NEW REVLON ARGENTINA S A C/ MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO S/ PRETENSION ANULATORIA**  
**Causa N°: 62862**

San Isidro, en el día de su firma digital.

**Y VISTOS:** Estos autos caratulados: "**NEW REVLON ARGENTINA S A C/ MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO S/ PRETENSION ANULATORIA**" (**Causa n° 62862**), en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de San Isidro a mi cargo, Secretaría única de los que:

**RESULTA: I .-** Con fecha 08/02/2022, se presenta el **Dr. Leonardo Pablo Cippitelli (T° XXIX F° 389 del C.A.S.I.)**, en su carácter de letrado apoderado y patrocinante de **NEW REVLON ARGENTINA S.A.** -ver poder adjuntado- e interpone la presente pretensión anulatoria contra la Municipalidad de San Isidro, con el objeto de obtener la declaración de nulidad de la determinación de oficio practicada en concepto de Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene -TISH-, por los períodos fiscales 2012/3A a 2016/5B -Resoluciones N° 78 y 41, de fechas 07/08/2017 y 18/06/2018 respectivamente-.

Asimismo, solicita que se devuelva a su mandante la suma de \$4.680.543,90 - la suma \$ 3.116.767,82 en concepto de Capital, más 1.563.776,08 en concepto de intereses- que fuera abonada bajo protesto, con fecha 09/10/2017 en cumplimiento del requisito de pago previo administrativo regulado en el artículo 26 bis de la Ordenanza Fiscal T.O. 2017.

Requiere que la misma sea devuelta con los intereses calculados desde la fecha de pago hasta la de su efectiva devolución.

**I.a.- Antecedentes:**

Señala que la controversia -plasmada en el ajuste practicado en el expediente Administrativo N° 6918-A-2017- se presenta en tanto la Municipalidad accionada pretende cobrar mensualmente a su mandante una suma en concepto de TISH, calculada sobre los ingresos brutos totales que la actora obtiene en la Provincia de Buenos Aires.

Entiende que la pretensión Municipal es inconstitucional pues vulnera los artículos 17, 18, 19, 28 y 31 de la C.N. y la jurisprudencia en la materia de la CSJN, el artículo 9 inciso b) de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos -LCFI-, el "Consenso Fiscal" firmado el 16/11/2017, al cual la Provincia de Buenos Aires adhirió mediante la sanción de la Ley N° 15.017 -que obliga a los Municipios que la integran a cumplirlo- y del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento de 1993.

**I.b.- Plantea nulidad de las resoluciones N° 78 y 41.**

Luego de relatar el derrotero transitado en la instancia administrativa acusa su nulidad y del procedimiento determinativo, por cuanto carecen de motivación, al omitir brindar los fundamentos por los cuales consideran que su

representada habría liquidado incorrectamente la TISH para los períodos 2012 a 2016 y, asimismo, explicar los motivos por los cuales: **a.-** estaría habilitado a cobrar la TISH cuando la base imponible de la misma está desvinculada del costo del servicio, cita jurisprudencia; **b.-** no analizó las defensas y la prueba aportada por su mandante, con la cual quedaba acreditado el sustento territorial en el Municipio de Tigre para los períodos objeto de ajuste; **c.-** rechazó la prueba pericial contable ofrecida tendiente a demostrar el costo del servicio de inspección de la Tasa y el monto recaudado por la Municipalidad en los períodos 2012 a 2016 sin analizar si los puntos de pericia ofrecidos resultaban conducentes para resolver el asunto; **d.-** fundó ambas resoluciones en sendos dictámenes del Área Legal de la Agencia, no habiéndolo notificado en ningún momento de ellos, omisión que lo priva de conocer la totalidad de los fundamentos. Cita jurisprudencia.

Plantea la nulidad por falta de fundamentación de las Resoluciones N° 78 y 41, en la inteligencia que: **a.-** no tuvo en cuenta el sustento territorial en el Municipio de Tigre; **b.-** no tuvo en cuenta el acuse de inconstitucionalidad efectuado en relación al art. 35 del CM; **c.-** la cita de normas y de doctrina no suple la falta de fundamentación del acto.

Asimismo, sostiene su nulidad por falta de causa y que ésta es manifiesta por cuanto la Administración omitió explicar por qué se aparta de la doctrina de la CSJN que cita, con una base imponible desvinculada totalmente del costo del servicio y además, sin considerar el sustento territorial de la actora en el Municipio de Tigre para los períodos objeto de ajuste.

Desarrolla los fundamentos de la demanda, precisando la caracterización de la tasa de inspección, su naturaleza jurídica y elementos esenciales.

Transcribe el artículo 79 de la Ordenanza Fiscal -conforme texto 2017-, para luego afirmar que siendo el tributo en cuestión una tasa, para ser válida debe reunir los siguientes requisitos: **a.-** Sustento territorial; **b.-** la efectiva, concreta e individualizada prestación de un servicio público, divisible, en cabeza del contribuyente y **c.-** la razonabilidad y proporcionalidad entre el costo del servicio y el importe del tributo.

#### **I.b.i.- Razonabilidad y proporcionalidad entre el costo del servicio y el importe del tributo.**

Afirma que la tasa se torna inconstitucional, atento a que no respeta esa proporcionalidad pues el Municipio no toma como parámetro de medición el costo del servicio que supuestamente presta sino que la base imponible sobre la cual pretende aplicar la tasa a su mandante está dada por los ingresos brutos de éste en la Provincia de Buenos Aires y ello surge de los antecedentes de la causa y la documental acompañadas .

Considera que la porción de tasa que exceda el costo del servicio efectivamente prestado, muta en un impuesto, afectando materia imponible coparticipada -en concreto el impuesto a las ganancias y al Valor Agregado-, vulnerando el artículo 9 inciso b) de la Ley de Coparticipación Federal que transcribe.

Considera que lo recaudado por la tasa debe estar destinado a cubrir únicamente el costo de los servicios cuya prestación ha determinado la imposición del tributo. Si lo recaudado en concepto de la TISH se utilizara para financiar un servicio distinto al que esa Tasa debe retribuir o se utilizara para solventar gastos corrientes del Municipio, la TISH no sería una tasa sino un impuesto.

Afirma que la tasa no debe tener un destino ajeno al servicio que constituye el presupuesto de la obligación. Cita doctrina y jurisprudencia.

#### **I.b.ii.- La falta de configuración del hecho imponible de la TISH por falta de prestación efectiva del servicio público divisible en cabeza de su mandante.**

Transcribe el artículo 79 de la OF -Texto 2017 y sus concordantes-, e indica que es una tasa retributiva de servicios y como tal no se cumple con el requisito de la efectiva, concreta e individualizada prestación de un servicio público, divisible, en cabeza del contribuyente, ello habida cuenta que la Municipalidad nunca le prestó a la accionante los servicios descriptos por el citado artículo 79.

Añade que tampoco podría prestárselos dada la indefinición de los supuestos servicios que no resultan ser ni públicos ni divisibles.

Observa que, en los antecedentes administrativos donde se dictaron las Resoluciones impugnadas, la Municipalidad no aportó una sola prueba que acredite la prestación efectiva de esos servicios a su representada, por lo

cual frente a la inexistencia de inspecciones la tasa no le es oponible, ni puede la Municipalidad perseguir el cobro de la misma, dado que es inválida por carecer de presupuesto de hecho. Cita jurisprudencia.

#### **I.b.iii.- La inaplicabilidad del artículo 35 del Convenio Multilateral.**

Reitera que la Resolución N° 41 convalidó la determinación de oficio efectuada a su mandante por la tasa.

Mediante la misma se ajustó la Base Imponible -BI- declarada, en función de los ingresos brutos generados por él en toda la Provincia de Buenos Aires argumentando que así lo autoriza el art. 35 del Convenio Multilateral y el artículo 226 del Decreto Ley N° 6769/58 -Ley Orgánica de las Municipalidades-.

Cita jurisprudencia y describe el fundamento normativo considerado a fin de obtener la BI declarada -art. 3, 80, de la Ordenanza Fiscal 2017 y art. 8 c) de la Ordenanza Impositiva-, precisando en lo sustancial y con fundamentos en jurisprudencia de la CSJN que se han tenido en cuenta que: **i.-** La Municipalidad carece de potestad para gravar con la tasa ingresos brutos obtenidos en extraña jurisdicción, fuera de su poder de imperio; y **ii.-** En ningún pasaje de los citados artículos está expresamente autorizado el Municipio a efectuar tal acrecentamiento.

Sostiene, interpretando literalmente la norma, que los ingresos gravados por la tasa son los obtenidos por su mandante dentro del Municipio, sin posibilidad alguna de acrecentar tal BI, por lo cual el ajuste efectuado es improcedente, al conformarse con materia imponible que no le pertenece al Municipio. Cita jurisprudencia.

#### **I.b.iv.- Solicita la aplicación del art. 35 2 párrafo del CM -en subsidio-.**

Entiende que para el período 2012 correspondía que se le aplique, en todo caso, el segundo párrafo del art 35 del Convenio Multilateral, dado que en ese momento aún no existía norma local que establezca que los Municipios solo podían cobrar la gabela sobre seguridad e higiene en caso de que el contribuyente posea local o establecimiento en el ejido municipal.

Afirma que acreditó la existencia de actividad de su mandante en el Municipio de Tigre -aportando prueba documental en sede administrativa que acreditarían pagos a la firma "Terminal Panamericana S.A" y actividad de empleados propios en el predio de ésta-, dando así sustento territorial en dicho ejido municipal.

Explica que sin perjuicio de la reforma introducida por la ley 14.393 a la Ley Orgánica de Municipalidades (Decreto -Ley N° 6769/58), estableciendo que ellas sólo podrán cobrar la gabela por inspección de seguridad e higiene en caso de que exista local o establecimiento en el ejido Municipal, el sustento territorial en el Municipio de Tigre, para períodos posteriores, también se encuentra acreditado en sede administrativa pues su mandante utilizó durante los períodos 2013/2016 un predio que estaba habilitado, por lo cual correspondía atribuir ingresos y gastos al Municipio de Tigre al momento de distribuir los ingresos en el mini convenio, tal como lo hizo su representada. Cita resoluciones de la Comisión Arbitral respecto a su interpretación del artículo 35.

#### **I.b.v.- Acusa prescripción.**

Entiende que por aplicación del art. 75 Inciso 12 CN y las normas del Código Civil -CC- que rigen la materia, el período 2012 se encuentra prescripto.

Destaca que no hubo acto suspensivo, ni interruptivo de la prescripción conforme la legislación de fondo aplicable y la Municipalidad intenta apartarse de las normas del CC, el cual es la legislación común sancionada por el Congreso Nacional para regular la prescripción de las obligaciones fiscales, así como sus causas de suspensión e interrupción, y desconoce reiterada y extensa jurisprudencia de la CSJN en la materia.

Realiza un análisis histórico del texto constitucional, citando doctrina y argumentos que refuerzan que la prescripción -conforme afirma lo sostiene la CSJN- es un instituto de derecho de fondo, por lo que está vedado a las legislaciones locales regular sobre la materia.

Precisa que el plazo de prescripción de las acciones y poderes de los Fiscos locales para determinar y exigir el pago de tributos locales es de cinco años, conforme lo previsto por el artículo 4027 inciso 3° del CC, que transcribe y, asimismo, la forma de cómputo del plazo se rige por el artículo 3956 del CC, es decir, comienza a correr desde el título de la obligación, siendo las causales de interrupción y suspensión regidas por el art. 3986 del CC.

#### **I.b.vi.- Sostiene la Inaplicabilidad del Código Civil y Comercial (Ley N° 26.944).**

Entiende que la normativa de fondo que debe aplicarse es el CC y no el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación -CCyCN- sería la norma aplicable.

Indica que el propio CCyCN regula en su artículo 2537 -que transcribe- lo atinente a los plazos de prescripción en curso y concluye que corresponde que se aplique el CC al caso de marras y no el CCyCN. Cita jurisprudencia.

Funda en Derecho. Ofrece Prueba. Hace reserva de caso federal.

**II.-** Que con fecha 12/08/2022, se presenta el **Dr. José María Gamarra (T° XLV F°201 CASI)**, en su carácter de letrado apoderado de la Municipalidad de San Isidro -ver poder adjuntado- y contesta la demanda incoada contra ese municipio, solicitando su rechazo, con costas.

Efectúa la negativa general y particular de los hechos y documentos acompañados a la demanda, en la medida que no sean materia de expreso reconocimiento en el desarrollo de su responde.

#### **II.a.- Antecedentes:**

Realiza el relato de los antecedentes administrativos y de la actividad de la actora en San Isidro, que se remonta al año 2009 cuando inició los trámites de habilitación por su propia voluntad.

Expone que la habilitación de los locales comerciales en cabeza de la actora ha sido realizada sin ningún tipo de presión, por el solo hecho de querer establecerse en el municipio demandado.

Puntualiza que la determinación de deuda calculada por el Municipio, respecto de la Tasa de Inspección de Comercios e Industrias ha sido establecida por su Ordenanza Fiscal en cuanto al hecho imponible, sujetos comprendidos en la Tasa, modo de cálculo y demás aspectos de la misma, respetando el principio de reserva de ley.

Agrega que todas las Ordenanzas han sido correctamente publicadas en tiempo y forma e indica la manera de verificar las mismas.

Sostiene que toda la normativa municipal en la materia se encuentra en total concordancia y armonía, teniendo su base en el artículo 226, inciso 17 de la Ley Orgánica de los Municipios que a su vez encuentra su correlato en el artículo 35, tercer párrafo, del Convenio Multilateral, vigente desde el año 1977.

Explica que la actuación administrativa se inició en el año 2016 con el propósito de verificar la conducta fiscal de la actora -New Revlon Argentina- con relación a la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias relativa a su establecimiento sito en la calle Ruta Panamericana Acceso Norte 264, de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de San Isidro.

Que analizada la documentación aportada por la empresa, por parte del cuerpo de inspectores de la Agencia de Recaudación Municipal -ARSI-, se determinaron y notificaron diferencias entre lo declarado por la actora y lo determinado por el municipio aplicando la normativa vigente en la materia -artículo 82 B) en función del artículo 226º inciso 17) de la Ley Orgánica Municipal siendo de aplicación lo establecido en el tercer párrafo del artículo 35 del Convenio Multilateral-.

Señala que ello concluyó en un ajuste en favor del municipio por los períodos comprendidos entre 2012 3A y 2016 5B cuya resolución determinativa obra en las copias certificadas del expediente administrativo que dice haber acompañado.

Indica que la actora ha participado activamente en el procedimiento administrativo, aportando documentación y ejerciendo su derecho de defensa correctamente.

Puntualiza que, en el presente caso, lo que está en juego es el territorio donde desarrolla la actividad, y la potestad en materia de Seguridad, Salubridad, Higiene y Ornamento que posee su mandante a los efectos de verificar el cumplimiento de esos supuestos.

Destaca que la actora poseía local que generó la determinación de la deuda por la incorrecta declaración jurada que había presentado y que la actividad que desarrolla en otra jurisdicción municipal no resulta ser por su propia cuenta sino a través de otra compañía, no contando con otra habilitación en otra jurisdicción municipal dentro de la provincia; no pudiendo, en consecuencia, aplicar base a esa otra jurisdicción.

Advierte que el reclamo de la parte actora resulta ser meramente local, no habiendo el Municipio incurrido en ningún tipo de exceso de facultades ni tampoco se ha entrometido en la competencia de ningún otro órgano, no existiendo facultades concurrentes en relación a las cuestiones que son exclusiva competencia municipal como las expresadas en el presente acápite.

Enfatiza que la actora no acompañó el "libro de habilitación" prueba documental que acreditaría que no hubo falta de prestación del Servicio por parte del Municipio.

Considera que la mera alusión de la falta de prestación del servicio no puede ser utilizada como presunción válida no aportando la parte reclamante prueba documental alguna o producción de prueba de ese supuesto. Cita jurisprudencia.

Afirma que no puede, en estas condiciones, darse por cierta la falta de la prestación del servicio objeto de la tasa, que su mandante ha prestado el servicio correspondiente y que la actora, en primer término no ha acreditado con respaldo documental prueba alguna de la falta de prestación del servicio.

Considera que el Municipio actuó legítimamente y no existe arbitrariedad manifiesta.

Describe el marco normativo que, a su entender, da fundamento al actuar administrativo para luego agregar que la empresa nunca acompañó elementos técnicos, ni jurídicos que logran acreditar que sus declaraciones juradas se encontraban ajustadas a la realidad material de los hechos verificados en el expediente administrativo que desencadenó el Acto Determinativo.

## **II.b.- De la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias. Razonabilidad. Antecedentes jurisprudenciales aplicables.**

Explica que dicha tasa resulta ser un recurso lícito y válido para procurar ingresos legítimos por parte del municipio de San Isidro y nada obsta la aplicación del criterio de capacidad contributiva respecto de las tasas retributivas de servicios. Cita jurisprudencia y doctrina de los órganos del Convenio Multilateral vinculados a la aplicación el tercer párrafo, de su artículo 35.

Sostiene que resulta falso que la tasa municipal se encuentre en pugna con la legislación federal y con los intereses federales, por ser además una facultad inherente al municipio establecida en la Constitución Nacional, y encontrarse en armonía con la ley fundamental y con todas las leyes federales del país. Cita jurisprudencia de la CSJN. Destaca la doctrina que surge del caso "ESSO".

Señala que el método de calculo de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias, se encuentra en el capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Municipal, artículos 79 hasta 88 y el mismo es establecido en el ejercicio de las facultades y la autonomía municipal, en base a los parámetros dictados por la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, el Convenio Multilateral, y la Ley Orgánica Municipal.

Transcribe el inciso 17º del artículo 226 -Texto según Ley 14393- y explica que a raíz de esa modificación es que comenzó a aplicarse el tercer párrafo del artículo 35 del Convenio Multilateral en lugar del segundo.

Afirma que la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias grava a los sujetos que desarrollan actividad en el municipio, sin importar la actividad que desarrollen, tomando como base de cálculo los parámetros establecidos en el tercer párrafo del artículo 35 del Convenio Multilateral.

Resalta que la actora por propia voluntad, y obedeciendo a criterios de carácter meramente comercial, ha resuelto instalarse en la jurisdicción municipal de su mandante. No ha desconocido su potestad tributaria, ha abonado lo que a su criterio correspondía, sin manifestar disconformidad hasta el momento de practicarse el ajuste.

Precisa que conforme surge de la documentación del expediente administrativo y conforme sus declaraciones juradas de Convenio Multilateral en materia de Ingresos Brutos, se puede apreciar que los montos exigidos son porcentajes menores -indica que son porcentajes de uno o menos de un dígito de su facturación correspondiente a la jurisdicción Provincia de Buenos Aires-, aplicando los coeficientes correspondientes a la distribución de base conforme el criterio de "local habilitado" y a lo normado por el tercer párrafo del artículo 35 del CM.

Concluye que resulta equitativa la cuestión a efectos que no quede base sin grabar, lo que resulta el objetivo de la aplicación de los coeficientes.

En cuanto al "Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento", expresa que desde el año 1993 todas las jurisdicciones firmantes lo han denunciado materialmente y formalmente también y las distintas circunstancias que ha atravesado el país desde su firma lo han hecho impracticable.

Agrega, en lo que atañe a la gabela en cuestión, no existe en su modo de cálculo, percepción o modo de prestación del servicio nada contrario a esa normativa.

Considera que la actora no acierta ninguna norma que pueda favorecerla respecto de la jurisprudencia actual en la materia.

Ofrece prueba. Funda en Derecho. Hace reserva de cuestión federal.

**III.- Del trámite:** Con fecha 21/09/2022, se dispuso la apertura a prueba de las presentes actuaciones. Producida la misma, con fecha 28/12/2023, se certificó sobre su producción y en la misma fecha se pusieron los autos para alegar, habiendo presentado los alegatos la parte actora y demandada -ver presentaciones electrónicas de fecha 08/01/2024 y 22/02/2024-, quedando las presentes actuaciones en estado de dictar sentencia con fecha 11/03/2024.

**CONSIDERANDO: I.-** Que conforme surge del escrito de inicio y su contestación, el objeto de la presente pretensión es la declaración de nulidad de la Resolución N° 78 de fecha 07/08/2017, mediante la cual la Agencia de Recaudación de la Municipalidad de San Isidro -ARSI- practicó un ajuste sobre lo abonado en concepto de Tasa de Inspección de Comercios e Industrias y estableció lo adeudado por **NEW REVLON ARGENTINA S.A.**, por los períodos fiscales 2012/3A a 2016/5B; y de la Resolución N° 41 -de la ARSI- de fecha 18/06/2018, que confirmó lo resuelto en la determinación de oficio a través de la Resolución N° 78.

Asimismo, en caso de prosperar la pretensión, se requiere la devolución de la suma de **\$ 4.680.543,90**, que fuera abonada en cumplimiento del requisito de pago previo administrativo exigido por el municipio accionado, más sus intereses, desde el día 09/10/2017 hasta la fecha de su efectiva devolución.

La parte actora fundamenta su planteo en tres líneas argumentativas, la primera se vincula con la valoración de la prueba y fundamentación efectuada en las Resoluciones puestas en crisis, en esta línea sostiene: **i.-** que ambas resoluciones están fundadas en sendos dictámenes del área legal de la agencia, no habiéndolo notificado en ningún momento de ellos, omisión que lo priva de conocer la totalidad de los fundamentos; **ii.-** no tuvo en cuenta la documentación que acreditaba el sustento territorial en el Municipio de Tigre; **iii.-** rechazó la prueba pericial contable ofrecida tendiente a demostrar la desproporción entre el costo del servicio de inspección de la Tasa y el monto recaudado por la Municipalidad en los períodos reclamados; **iv.-** no tuvo en cuenta el planteo de inconstitucionalidad efectuado en relación al artículo 35 del CM; **iv.-** no explica por qué estaría habilitado a cobrar la TISH cuando la base imponible de la misma está desvinculada del costo del servicio, afirmando que la cita de normas y de doctrina no suple la falta de fundamentación del acto.

La segunda línea argumentativa se refiere a los fundamentos sustanciales de su planteo, así sostiene que: **i.-** la pretensión municipal plasmada en la Resolución 78/17, que la Resolución N° 4/18 convalidó -dictadas ambas por la ARSI-, que exteriorizan la determinación de oficio efectuada a su mandante, por la tasa y mediante la cual se ajustó la BI declarada, en función de los ingresos brutos generados por la actora en toda la Provincia de Buenos Aires es inconstitucional pues vulnera los artículos 17, 18, 19, 28 y 31 de la C.N. y la jurisprudencia en la materia de la CSJN, el artículo 9 inciso b) de la Ley de LCFI, el "Consenso Fiscal", y el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento de 1993; **ii.-** que existe una desvinculación entre el costo del servicio de inspección de la Tasa y el monto recaudado por la Municipalidad en los períodos 2012 a 2016; por ello la porción de Tasa que exceda el costo del servicio efectivamente prestado, muta en un impuesto, afectando materia imponible coparticipada afecta la misma base imponible que del impuesto a la las ganancias y al Valor Agregado, vulnerando el art. 9 inciso b) de la LCFI; **iii.-** que lo recaudado por la tasa debe estar destinado a cubrir únicamente el costo de los servicios cuya prestación ha determinado la imposición del tributo; **iv.-** que la tasa no debe tener un destino ajeno al servicio que constituye el presupuesto de la obligación; **v.-** que la Municipalidad de San Isidro carece de facultades para gravar los ingresos obtenidos fuera del

ejido municipal; **vi.-** que los artículos 35 del Convenio Multilateral y 226 del Decreto Ley N° 6769/58 -Ley Orgánica de las Municipalidades-, no autorizan a la Municipalidad de San isidro a efectuar el acrecimiento de la base imponible con ingresos sin sustento territorial; **vii.-** que posee sustento territorial en el partido de Tigre para los períodos objeto de ajuste y por ello no puede atribuirse una mayor Base Imponible, en función de los ingresos brutos generados por él en toda la Provincia de Buenos Aires -el art. 35 del CM es inaplicable-; **ix.-** Solicita la aplicación del art. 35 2 párrafo del CM -en subsidio-.

La tercera línea argumentativa mediante la cual formula su embate contra la tasa impugnada se vincula más a argumentos fácticos que jurídicos pues sostiene que: **i.-** siendo el tributo en cuestión una tasa, para ser válida además de poseer sustento territorial y ser razonable y proporcional el costo del servicio y el importe del tributo, la misma se debe corresponder a la efectiva, concreta e individualizada prestación de un servicio público, divisible, en cabeza del contribuyente (el subrayado me pertenece); **ii.-** que la Municipalidad nunca le prestó a la accionante los servicios descriptos por el citado artículo 79 de la Ordenanza Fiscal 2017; **iii.-** que no se los puede prestar porque los servicios son "indefinidos", no son públicos, ni divisibles; **iv.-** la falta de configuración del hecho imponible de la tasa por falta de prestación efectiva del servicio público divisible en cabeza de su mandante; **v.-** la Municipalidad no acredita la prestación efectiva de esos servicios a su representada.

Finalmente acusa la prescripción del período 2012 -entiende que resulta aplicable el CC y no el nuevo CCYCN-.

Por su parte el Municipio accionado sostiene que: **i.-** que la actora se estableció en el Municipio libremente; **ii.-** que la determinación de deuda calculada por el Municipio, respecto de la Tasa de Inspección de Comercios e Industrias ha sido establecida por su Ordenanza Fiscal en cuanto al hecho imponible, sujetos comprendidos en la Tasa, modo de cálculo y demás aspectos de esta, respetando el principio de reserva de ley; **iii.-** que todas las Ordenanzas han sido correctamente publicadas en tiempo y forma e indica la manera de verificar las mismas; **iv.-** que toda la normativa municipal en la materia se encuentra en total concordancia y armonía, teniendo su base en el artículo 226, inciso 17 de la Ley Orgánica de los Municipios que a su vez encuentra su correlato en el artículo 35, tercer párrafo, del Convenio Multilateral, vigente desde el año 1977; **iv.-** que iniciadas las actuaciones administrativas y analizada la documentación aportada por la empresa, por parte del cuerpo de inspectores de la Agencia de Recaudación Municipal -ARSI-, se determinaron y notificaron diferencias entre lo declarado por la actora y lo determinado por el municipio aplicando la normativa vigente en la materia y ello concluyó en un ajuste en favor del municipio por los períodos comprendidos entre 2012 3A y 2016 5B; **vi.-** la actora se encuentra disconforme con el ajuste porque intentó -sin éxito- aplicar o desgravar porcentajes en jurisdicciones municipales donde no posee local comercial y en consecuencia, donde no abona tributo como el cuestionado en cuanto a su monto en el presente; **vii.** la pretensión iniciada por la empresa va contra sus propios actos y que procura eludir su obligación tributaria generada en el Municipio; **viii.-** que la actora ha participado activamente en el procedimiento administrativo, aportando documentación y ejerciendo su derecho de defensa correctamente; **ix.-** que está en juego es el territorio donde desarrolla la actividad, y la potestad en materia de Seguridad, Salubridad, Higiene y Ornamento que posee el Municipio a los efectos de verificar el cumplimiento de esos supuestos; **x.-** que la actividad que la actora desarrolla en otra jurisdicción municipal no resulta ser por su propia cuenta sino a través de otra compañía, no contando con otra habilitación en otra jurisdicción municipal dentro de la provincia; no pudiendo, en consecuencia, aplicar base a esa otra jurisdicción; **xi.-** que el reclamo de la parte actora resulta ser meramente local, no existe norma federal vulnerada, no habiendo el Municipio incurrido en ningún tipo de exceso de facultades ni tampoco se ha entrometido en la competencia de ningún otro órgano; **xii.-** que el servicio ha sido prestado efectivamente durante todo el período cuestionado y que la mera alusión de la reclamante en cuanto a ese aspecto no puede tenerse como cierta sin aportar prueba alguna de ello -señala que debió acompañar el libro de habilitaciones que cada contribuyente tiene en su poder y donde también se refleja el servicio que presta el Municipio-; **xiii.-** que el Municipio actuó legítimamente y no existe arbitrariedad manifiesta; **xiv.-** que no prueba de ningún modo cuál es el perjuicio directo que le ha generado tener que abonar un tributo por ejercer el comercio en la jurisdicción municipal, y se le cobre la misma tasa que a cualquier sujeto que pretenda hacer lo mismo.

**II.-** Previo a introducirme en el análisis concreto de los argumentos desarrollados por las partes, es menester precisar las facultades tributarias de los municipios de la Provincia de Buenos Aires.

**II.i.-** Cabe destacar que conforme fuera señalado "desde su texto originario la Constitución Nacional consagró al municipio como parte integrante de la organización política federal, ordenando a las provincias el aseguramiento de su régimen (artículo 5°). Luego, la reforma constitucional de 1994 -al incorporar el artículo 123- ratificó esa intencionalidad, explicitando que el "régimen municipal" del citado artículo 5° refería a la capacidad jurídico-política de la autonomía en sus aspectos institucional, político, administrativo, económico y financiero, y confiriendo a las provincias la atribución de reglamentar -sin desnaturalizar- su contenido y alcances concretos (Fallos:325:1249, considerando 7°; 337:1263 y 341:939). De acuerdo a este diseño, el municipio como ente autónomo encuentra su origen normativo en la Constitución Nacional y el quantum de sus atribuciones, competencias e incumbencias, en las constituciones provinciales y demás normas complementarias de derecho público interno. (CSJN Fallos: 344:2123, voto de los jueces Maqueda y Rosatti).

En este sentido el artículo 190 de la Constitución Provincial otorga competencia a los municipios en "la administración de los intereses y servicios locales". Su artículo 191 dispone que "la legislatura deslindará las atribuciones y responsabilidades de cada departamento, confiriéndoles las facultades necesarias para que ellos puedan atender eficazmente a todos los intereses y servicios locales".

Por su parte, los incisos 4° y 5° del artículo 192 establecen, como atribución inherente al régimen municipal "4. Tener a su cargo el ornato y salubridad [...] y la vialidad pública 5. Votar anualmente su presupuesto y los recursos para costearlo;(.)".

Esta atribución tiene como límite aquél previsto en el inciso segundo del artículo 193 que dispone "Todo aumento o creación de impuestos o contribución de mejoras, necesita ser sancionado por mayoría absoluta de votos de una asamblea compuesta por los miembros del Concejo Deliberante y un número igual de mayores contribuyentes de impuestos municipales."

Asimismo, su artículo 194 impone la responsabilidad de sus funcionarios y empleados públicos por los daños y perjuicios provenientes de la falta de cumplimiento a sus deberes, responsabilidad que obviamente alcanza al propio Estado municipal.

Cabe señalar que la CSJN sostuvo que "(.) las leyes-convenio -entre las que cabe incluir el régimen de coparticipación federal y el Convenio Multilateral en sus respectivas ratificaciones locales por medio de las legislaturas provinciales- hacen parte, aunque con diversa jerarquía, del derecho público provincial y que esa condición asume la ley de coparticipación federal, por lo que su violación no abre la instancia originaria ante esta Corte." (Papel Misionero C/ Misiones, Provincia de s/Acción Declarativa. 05/05/2009. Fallos: 332:1007).

El artículo 9 de la actual ley de coparticipación -ley 23.548- dispone en su artículo 9° que " La adhesión de cada provincia se efectuará mediante una ley que disponga: a) Que acepta el régimen de esta Ley sin limitaciones ni reservas. b) Que se obliga a no aplicar por sí y a que los organismos administrativos y municipales de su jurisdicción, sean o no autárquicos, no apliquen gravámenes locales análogos a los nacionales distribuidos por esta Ley. En cumplimiento de esta obligación no se gravarán por vía de impuestos, tasas, contribuciones u otros tributos, cualquiera fuere su característica o denominación, las materias imponible sujetas a los impuestos nacionales distribuidos ni las materias primas utilizadas en la elaboración de productos sujetos a los tributos a que se refiere esta ley, esta obligación no alcanza a las tasas retributivas de servicios efectivamente prestados, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente." (el subrayado me pertenece).

**II.ii.-** Sentado ello, cabe precisar que el artículo 226 de la LOM, dispone que "Constituyen recursos municipales los siguientes impuestos, tasas, derechos, licencias, contribuciones, retribuciones de servicios y rentas: (.) 17° (Texto según Ley 14393) Inscripción e inspección de seguridad, salubridad e higiene en establecimientos u oficinas, en los que se desarrolle actividades comerciales, industriales, servicios, científicas y toda otra actividad, cuando exista local, establecimiento y/u oficina habilitado o susceptible de ser habilitado, situado dentro del ejido del Municipio (.).

Asimismo, el artículo 227 establece que "La denominación "Impuestos" es genérica y comprende todas las contribuciones, tasas, derechos y demás obligaciones que el municipio imponga al vecindario en sus ordenanzas, respetando los límites establecidos en esta ley y los principios generales de la Constitución." y el artículo 228° que "La percepción de impuestos municipales es legítima en virtud de la satisfacción de las necesidades colectivas que con ella se procura (..)".

Asimismo, la LOM, en su artículo 25 dispone que "Las ordenanzas deberán responder a los conceptos de ornato, sanidad, asistencia social, seguridad, moralidad, cultura, educación, protección, fomento, conservación y demás estimaciones encuadradas en su competencia constitucional que coordinen con las atribuciones provinciales y nacionales."

A vez el artículo 27 inciso 1° delega la competencia en el Concejo Deliberante para reglamentar todo lo concerniente ".

Finalmente, es el Sr. Intendente municipal quien ejerce, con exclusividad, la administración general del municipio y la ejecución de las ordenanzas dictadas (conf. art. 107).

**II.iii.**-El artículo 79 de las Ordenanzas Fiscales de los períodos reclamados establece "Por los servicios de inspección y control destinados a preservar la seguridad, salubridad e higiene, así como la continuidad de las condiciones de habitabilidad a que se refiere el Capítulo III, de los comercios, industrias, servicios y actividades asimilables a tales, aún cuando se tratare de servicios públicos, que se desarrollen en locales, establecimientos u oficinas, y por los servicios destinados a verificar el mantenimiento de las condiciones en base a las cuales se otorgara el permiso de localización, se abonará la tasa que al efecto se establezca."

La base imponible y la manera de determinar el monto a abonar están previstos en los artículos 80 y 82.

Asimismo, el artículo 83 dispone que "a) Cada responsable deberá presentar una Declaración Jurada informando los Ingresos Brutos Devengados en forma BIMESTRAL, la que se ajustará a las formas y medios que disponga el Departamento Ejecutivo o toda otra información de interés fiscal para la determinación de este tributo. (.)".

Cabe señalar que su artículo 10 establece que "Los hechos y/o actos impositivos son los que bajo la denominación de tasa, derecho, contribución, impuesto o patente, se determinan en el Título II de esta Ordenanza, donde también se precisan las respectivas bases impositivas.

Se entiende por hecho impositivo todo acto, operación o situación de los que la presente Ordenanza u otras Ordenanzas especiales hagan depender el nacimiento de la obligación impositiva.

Dentro de sus recursos, la Municipalidad se encuentra facultada para percibir TRIBUTOS (impuestos, tasas, derechos, patentes y demás contribuciones de acuerdo con lo que establecen las Ordenanzas Tributarias).

A) TASAS Son tasas MUNICIPALES los tributos cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva o potencial de un servicio público individualizado por el contribuyente.(.)".

Asimismo, su artículo 14 establece los deberes formales de los contribuyentes al disponer que "A los fines de la determinación, verificación, fiscalización y percepción de los gravámenes, los contribuyentes y/o responsables estarán obligados a:

a) Presentar declaraciones juradas de los hechos y/o actos impositivos, en el tiempo y forma que en cada caso se determine;

b) Comunicar, dentro de los quince (15) días de producida, toda circunstancia que, en los términos de esta Ordenanza, influya en la determinación, modificación o extinción de los hechos y/o actos impositivos;

c) Conservar por diez (10) años la documentación vinculada con los hechos y/o actos impositivos y exhibirla a los funcionarios comunales cuando éstos lo requieran;

d) Contestar dentro del término que se le fije al efecto, todo requerimiento que le formule la comuna sobre sus declaraciones juradas y sobre los hechos y/o actos impositivos;

e) Prestar colaboración a los funcionarios comunales en la verificación y fiscalización de los hechos y/o actos impositivos.

f) Presentar los permisos y planos de construcción, demolición, y/o ampliación en debido tiempo y forma de acuerdo a la norma específica que lo establece.

g) Comunicar al Departamento Ejecutivo la petición de concurso preventivo o quiebra propia, dentro de los cinco (5) días de la presentación judicial, acompañando copia de la documentación exigida por las disposiciones legales aplicables. El incumplimiento de esta obligación por parte del deudor liberará a la administración municipal de las costas que pudieren corresponder, quedando a cargo del concursado.

**III.-** Conforme lo ha señalado la CSJN la tasa es una categoría tributaria derivada del poder de imperio del Estado, que si bien tiene una estructura jurídica análoga al impuesto, se diferencia de éste por el presupuesto de hecho adoptado por la ley, que consiste en el desarrollo de una actividad estatal que atañe al obligado (Fallos: 335:1987) y que a su cobro debe corresponder siempre la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente (Fallos 312:1575).

Por su parte la SCBA ha entendido que "los tributos se diferencian en cuanto al presupuesto de hecho adoptado por la ley para poder exigirlos: en el caso de la tasa, la prestación efectiva o potencial de una actividad de interés público que afecta al obligado; en el caso del impuesto, el hallarse en una de las situaciones consideradas por la ley como hecho imponible (conf. causas I. 1.270, "Casa Blanco S.C.A.", sent. de 18-IV-1989; I. 1.286, "Papelera Juan", sent. de 18-VI-1991; B. 51.937, "Nobleza Piccardo", sent. de 28-XI-1995; B. 56.454, "Pecom Energía S.A.", sent. de 17-XII-2003; e.o.)" (SCBA, Causa B. 63.745, "Automóvil Club Argentino", sentencia de 29-XII-2020, causa A. 73.508, "Cappaccioni", sentencia de 24-II-2021).

También precisó que la potencialidad del servicio refiere a que el sujeto al que se le exija el pago de la tasa debe encontrarse objetivamente en condiciones de recibir ese servicio, es decir, debe contar en el ámbito del municipio respectivo con un asentamiento capaz de ser inspeccionado. Asimismo, la comuna debe estar en condiciones efectivas de prestar el servicio al que está obligado. Específicamente se señaló que la potencialidad está vinculada con la negativa y aun con la resistencia del sujeto pasivo a recibir el servicio de inspección, quien deberá abonar la tasa siempre que se encuentre comprendido en la descripción del hecho imponible sin poder rehusarse bajo el argumento de que resigna los beneficios que tal prestación pudiera significarle, ya que el servicio tiene en mira el interés general (SCBA LP A 73508 RSD-42-21 "Cappaccioni", sentencia de 24-II-2021).

En cuanto a la frecuencia con la cual debe prestarse el servicio señaló que si bien la norma específica no impone al Estado como condición para percibir la tasa la obligación de prestar el servicio con una regularidad determinada, cierto es que el mismo debe desarrollarse con una periodicidad razonable atendiendo al fin público al que está encaminado (SCBA LP A 75855 RSD-73-2022 S 06/09/2022).

Así, entendió que, la tasa debe ser abonada aun cuando todavía no se hubiera llevado a cabo la actividad de inspección; afirmación esta última que no puede llegar al absurdo de convalidar la ilegitimidad de un obrar municipal que se limite a organizar el servicio y exija el pago de la tasa sin llevar adelante la actividad de contralor a su cargo en términos que, bajo estándares de razonabilidad, atiendan a la seguridad e higiene de la población. (SCBA LP A 73508 RSD-42-21 "Cappaccioni", sentencia de 24-II-2021).

**III.-** Delineado el marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso de autos me abocare al análisis de las constancias que surgen del expediente administrativo N° 6918 que fuera acompañado en autos.

A fs. 1/2 luce el Acta de Requerimiento, notificada a la accionada con fecha 21/10/2016, mediante la cual le solicitan que acompañe la documentación indicada.

A fs. 1051/1055 se encuentra agregado el dictamen legal.

A fs. 1061/1065 obra la Resolución N° 78, mediante la cual se confirma la deuda de New Revlon Argentina S.A. por la suma de \$ 3.116.767,82, en concepto de capital, más multas y recargos.

A fs. 1083/1105, luce el recurso de revocatoria con jerárquico en subsidio interpuesto por la aquí actora.

A fs. 1122/1123 se encuentra agregado el Dictamen legal del arrea jurídica de la ARSI.

A fs. 1126 luce el dictamen de la Asesoría Legal de fecha 17/05/2018.

A fs. 1133/1135 se encuentra agregada la Resolución N° 41, de fecha 18/06/2018, mediante la cual se rechazó el recurso de revocatoria interpuesto y se ratificó lo resuelto en la Resolución ARSI N° 78 de fecha 07/08/2017.

Del análisis de las actuaciones señaladas se puede arribar, en un primer término, a las siguientes conclusiones: **i.-** el procedimiento es iniciado por el acta de requerimiento fs. 1/2; **ii.-** de las constancias obrantes en el expediente no hay ningún documento que haga referencia a la prestación del servicio descripto como hecho imponible; **iii.-** en ninguno de los dictámenes jurídicos existentes, ni en las resoluciones se menciona la fecha en que se prestaron los servicios a cargo del Municipio.

**IV.-** Sentado ello, me abocaré al análisis de lo que denominé tercera línea argumentativa, ello en la inteligencia que, previo a analizar si la facultad para practicar el ajuste se encuentra prescripta -o no-, si la misma fue ajustada a derecho resulta necesario precisar si se encuentra configurado el hecho imponible que genera el pago de la obligación tributaria.

La idea fundamental que plantea el accionante es que, al ser una tasa, la misma se debe corresponder a la efectiva, concreta e individualizada prestación de un servicio público, divisible, en cabeza del contribuyente y que la Municipalidad nunca le prestó a la accionante los servicios descriptos por el citado artículo 79 de la Ordenanza Fiscal 2017.

En la especie, esta actividad estatal que la propia legislación local establece como presupuesto de hecho o hecho generador de la obligación consiste en brindar servicios de "inspección y control destinados a preservar la seguridad, salubridad e higiene, así como la continuidad de las condiciones de habitabilidad, etc".

Como señale en el considerando "II.iii.-", por disposición del artículo 83 de la ordenanza fiscal, es el contribuyente quien debe presentar sus declaraciones juradas y efectuar el pago de acuerdo a la misma.

De acuerdo a este esquema normativo, el contribuyente abona el servicio de manera bimestral sin que exista norma alguna que establezca la periodicidad con la que el mismo debe ser prestado.

Como lo señale en el "III" considerando, nuestra Suprema Corte hizo referencia al concepto de razonabilidad a la hora de analizar la periodicidad con la que debe prestarse el servicio (conf. SCBA LP A 75855 RSD-73-2022 S 06/09/2022 y SCBA LP B 63745 RSD-225-20 S 29/12/2020).

El caso de autos se trata de un ajuste practicado a la firma **New Revlon Argentina S.A.** con relación a lo abonado en concepto de Tasa por Inspección de Comercios e Industrias por los períodos 2012 3 A a 2016 5 B.

De acuerdo a lo expresado en el considerando que antecede, no existe ningún elemento en las actuaciones administrativas que dé cuenta que los servicios fueron prestados, ni antes, ni después de practicarse el requerimiento de fs. 1/2, tampoco se hace referencia a su prestación tanto en los dictámenes jurídicos previos como en las Resoluciones de la ARSI N° 78/18 y 41/18.

Obsérvese que la Resolución N° 78 fue dictada el día 07/08/2017 y los períodos ajustados datan del año 2012 -3A-.

En este andar si bien es cierto que no existe norma que establezca la periodicidad con la que deben prestarse los servicios por parte del órgano estatal, lo cierto y concreto es que al no haberse prestado el servicio en ninguno de los períodos ajustados, no se cumple con la periodicidad razonable atendiendo al fin público al que está encaminado el servicio descripto (SCBA LP A 75855 RSD-73-2022 S 06/09/2022) y la pretensión fiscal de ajustar los períodos señalados, basado en las probanzas de la presente acción, adolecería de causa -conf. art. 108, Ord, Gral 267/1980- y por ello anticipo la procedencia de la presente pretensión y la declaración de nulidad de las Resoluciones N° 78 y 41 de la Agencia de Recaudación de la Municipalidad de San Isidro, dictadas con fecha 07/08/2017 y 18/06/2019, respectivamente.

**V.-** No enerva lo expuesto el argumento esbozado por la accionada mediante el cual sostiene que la actora no acompañó el "libro de habilitación" prueba documental que acreditaría que no hubo falta de prestación del Servicio por parte del Municipio.

En este sentido, no obstante la claridad de lo expuesto en el considerando que antecede, pues el hecho imponible debe configurarse antes de practicarse el ajuste, debo señalar que de la normativa que resulta aplicable al caso y que fuera analizada en los considerandos que anteceden no surge que se le otorgue al "libro de habilitación" tales efectos y mucho menos que esa sea la única forma de acreditar la prestación -o no- del servicio.

En este sentido la CCASM, sostuvo que "La manifestación realizada de que al momento en que reciben la habilitación municipal se les entrega el libro de inspecciones donde se asientan las mismas, carece de relevancia probatoria a los fines de acreditar si se realizaron -o no- inspecciones en el marco del tributo reclamado. (CCASM, "Amx Argentina S.A. C/ Municipalidad De Merlo S/ Pretensión Anulatoria", sentencia de fecha 15/04/2021).

**VI.** Teniendo en cuenta lo expuesto, no encontrándose controvertido que la accionante abonó -en cumplimiento del requisito de pago previo administrativo exigido por el municipio accionado ver. Folios 1111/1119 del expte adm N° 6918- la suma determinada más sus intereses, monto que denuncia en su escrito de inicio que asciende a la suma de **\$ 4.680.543,90**, y se acredita con los comprobantes señalados, corresponde ordenar su devolución, más sus intereses, desde el día 09/10/2017, hasta la fecha de su efectiva devolución.

En cuanto a los intereses a aplicarse en el caso, cabe atenerse a la doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, determinando que los intereses deberán calcularse mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a 30 días, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso (arts. 622 y 623 del Código Civil, 768 inc. c y 770 del Código Civil y Comercial, 7 y 10 de la Ley 23.928) (SCBA, C. 119176 "Cabrera Pablo David c/ Ferrari, Adrián Ruben s/ Daños y Perjuicios", S, 15-06-2016).

**VII.-** Teniendo en cuenta la forma en que se resuelven las presentes actuaciones las costas se imponen a la demandada en su calidad de vencida (art. 51 inc. 1 del C.C.A.).

Por todo lo expuesto en los considerandos que anteceden, jurisprudencia y doctrina citada es que

**FALLO: I.-** Haciendo lugar a la pretensión anulatoria iniciada por **New Revlon Argentina S.A.** contra la **Municipalidad de San Isidro**, declarando la nulidad de las Resoluciones N° 78 y 41 de la Agencia de Recaudación de la Municipalidad de San Isidro, dictadas con fecha 07/08/2017 y 18/06/2019, respectivamente.

**II.-** Ordenar la devolución de la suma de **PESOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES CON 90/00 (\$ 4.680.543,90)**, más sus intereses, que se calcularan de acuerdo a lo señalado en el considerando VI y desde el día 09/10/2017 hasta su efectivo pago.

**III.-** Difiriendo la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes hasta que obre en autos liquidación aprobada y firme -art. 51 de la ley 14.967-.

**IV.- Regístrese. Notifíquese por Secretaría (art. 10 Ac. 4013/21, modif. Ac. 4039/21).**

Para verificar la notificación ingrese a: <https://notificaciones.scba.gov.ar/verificar.aspx>  
Su código de verificación es: N67YH6



239101637001716833